

# INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2013 PANAMÁ

## RESUMEN EJECUTIVO

Panamá es una democracia constitucional multipartidista. En el 2009 los electores escogieron a Ricardo A. Martinelli Berrocal como presidente en elecciones nacionales que fueron generalmente consideradas libres e imparciales por los observadores internacionales y locales. Las autoridades civiles mantuvieron control efectivo sobre los estamentos de seguridad. Los estamentos de seguridad no cometieron abusos de derechos humanos, a pesar de que casos que involucraron alegatos de abuso que vienen del año previo permanecían sin resolución.

Los principales abusos de derechos humanos incluyeron condiciones de privación de libertad muy severas; ineffectividad del sistema judicial y ataques a la libertad de expresión.

Otros abusos a los derechos humanos reportados incluyeron detención preventiva prolongada, corrupción, violencia en contra de las mujeres y niños y niñas, trata de personas y el trabajo infantil.

El gobierno enjuició pocos supuestos casos de corrupción o de abuso de autoridad por funcionarios gubernamentales, dejando una amplia percepción de impunidad.

### **Sección 1. Respeto por la Integridad de la Persona, Incluyendo la Libertad de No Ser Sometido a:**

#### **a. Privación Arbitraria o Ilícita de la Vida**

No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos; sin embargo, hubo homicidios cometidos por miembros de los estamentos de seguridad en el ejercicio de su deber.

En octubre, en la carretera Panamericana cerca del pueblo de San Carlos, la policía disparó a un automóvil que confundieron con un automóvil similar que creían estaba siendo conducido por presidiarios fugitivos. Un niño de dos años y una niña de 15 murieron como resultado. El incidente ocasionó grandes protestas y las organizaciones de la sociedad civil exigieron rendición de cuentas. A pesar de que la Policía Nacional de Panamá (PNP), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría

General de la Nación iniciaron investigaciones separadas, ninguna resulto en enjuiciamiento o suspensión.

No hubo progreso en cuanto al asesinato en el 2012 de tres personas en Colón por policías intentando reprimir las protestas en contra de la controversial ley para la venta de terrenos. La PNP, la Defensoría de Pueblo y la Procuraduría General de la Nación iniciaron investigaciones separadas pero a fin de año no se habían dado ni enjuiciamientos ni suspensiones.

Persistía una amplia percepción de impunidad, ya que todos los años se anuncian investigaciones pero no se publican los resultados. La Ley 74 de 2010 que prohibía el arresto de policías en casos de uso de fuerza no autorizado, fue declarada anticonstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre. La ley había sido utilizada para otorgar perdones a aproximadamente 120 policías y para retrasar otros casos.

#### **b. Desapariciones**

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

#### **c. Tortura y Otras Formas de Trato o Castigo Crueles, Inhumanas o Degradantes**

La constitución prohíbe dichas prácticas, pero la Defensoría del Pueblo publicó informes creíbles en cuanto a que las instalaciones penitenciarias aplicaban tratos degradantes y castigos inhumanos. Familiares de los reclusos a veces esperaban en línea afuera de las cárceles entre las 5:00 a.m. y las 3:00 p.m. para obtener aprobación para las visitas y eran sometidos a cacheos al desnudo antes de entrar. Las áreas de espera para los familiares no tenían baños.

Entre enero y octubre la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional abrió 619 procesos disciplinarios en contra de oficiales de la policía, incluyendo 87 por abuso en contra de civiles, 56 por conducta inapropiada, 16 por abuso doméstico, cuatro por facilitar el escape de reclusos, y otros procesos por el uso de fuerza excesiva y otros abusos. En octubre la Defensoría del Pueblo abrió un caso por el posible abuso de autoridad y uso de fuerza excesiva por dos agentes de la Policía Nacional de Panamá en un incidente en el cual murieron dos menores.

En abril el Tribunal Penal 15 solicitó el juicio de los agentes de la PNP Ferdin González y Miguel Rivera por abuso físico del doctor Rafael Perez Castillo en 2011. Para finales de noviembre aún no se había fijado una fecha para el juicio.

### **Condiciones de las Cárceles y Centros de Detención**

Las condiciones en las cárceles seguían siendo severas y, en algunos casos, presentaban una amenaza a la vida. Los problemas incluían hacinamiento, uso de las estaciones policiales como centros de detención, la falta de custodios para las cárceles y atención médica inadecuada.

Condiciones Físicas: Los problemas incluían hacinamiento; falta de servicios médicos; falta de agua potable; y ventilación, iluminación y alcantarillado inadecuados. Hasta septiembre el sistema penitenciario tenía una capacidad prevista de 8,576 personas pero mantenía a 15,124 reclusos (14,056 reclusos masculinos y 1,068 femeninos). En un esfuerzo por aliviar el hacinamiento, el gobierno liberó, durante el año, a 901 privados de libertad que habían cumplido dos tercios de su condena y liberó a otros 101 privados de libertad bajo libertad condicional.

Los reclusos masculinos y femeninos, juveniles y adultos, fueron mantenidos separados. Los detenidos en prisión preventiva compartían celdas con los reclusos condenados debido a limitaciones de espacio; sin embargo, las autoridades carcelarias empezaron a separar los dos grupos durante el año. Hasta septiembre, 48 por ciento de los detenidos en prisión preventiva habían sido separados de los reclusos condenados. Hasta septiembre los detenidos en detención preventiva eran separados de los reclusos condenados sólo en las cárceles de los Algarrobos, Llano Bonito y La Chorrera. Aun cuando las condiciones carcelarias para las mujeres generalmente eran mejores que para los hombres, ambas poblaciones seguían sufriendo de hacinamiento, atención médica pobre, y la falta de suministros básicos para higiene personal. Los centros de cumplimiento y de custodia juveniles también sufrían de hacinamiento y condiciones pobres. Los reclusos no gozaban de supervisión adecuada. Sólo había 726 custodios carcelarios a nivel nacional. En junio se aprobaron fondos para contratar a 200 custodios carcelarios nuevos y para septiembre, 125 custodios carcelarios habían sido contratados y estaban siendo capacitados. En todas las cárceles los reclusos se quejaron del poco tiempo que pasaban fuera de sus celdas y del acceso limitado a visitas familiares. Pequeñas cárceles anexadas a estaciones de policía locales a veces mantenían a reclusos por días o semanas, y los oficiales de policía que los custodiaban no tenían el entrenamiento necesario como custodios para prevenir abusos.

La atención médica en las prisiones era inadecuada debido a falta de personal y recursos médicos. La Defensoría del Pueblo informó que sólo había tres doctores en el complejo de La Joya-La Joyita, uno en la cárcel de mujeres, uno en la cárcel de Colón, uno en El Renacer y uno en Tinajitas. Las clínicas dentro de las cárceles La Joya y La Joyita brindaban asistencia de primeros auxilios pero no tenían la capacidad de atender problemas médicos más serios. Entre enero y junio hubo 20,026 casos de asistencia médica a reclusos en todo el país, en comparación con 37,453 en el 2012. La Joyita tenía una clínica con 60 camas que permanecía con poco uso debido a la falta de custodios para vigilar a los detenidos enfermos. En muchos casos las autoridades trasladaban a los pacientes a clínicas públicas en vez. Sin embargo, a menudo era difícil gestionar el transporte de reclusos a clínicas públicas. Sólo una ambulancia estaba en servicio. VIH/SIDA, tuberculosis, y otras enfermedades contagiosas eran comunes entre la población carcelaria. Entre enero y septiembre se estima que un 45 por ciento de las citas médicas se perdían debido a la falta de escoltas de la Policía Nacional. De 167 quejas de los reclusos a la Defensoría del Pueblo hasta noviembre, la gran mayoría se relacionaban a atención médica pobre o inadecuada o problemas con el sistema de transporte para asistir a citas médicas.

Hasta noviembre cuatro reclusos habían muerto a causa de violencia entre reclusos en las cárceles, cinco habían muerto por VIH, cinco por ataques cardíacos, dos por tuberculosis, uno de cáncer y cinco por causas naturales.

Hasta septiembre, 3,904 reclusos estaban matriculados en programas educativos dentro y fuera de las cárceles y 1,829 reclusos trabajaban dentro y fuera de las cárceles. El sistema continuaba aplicando una reducción de condena de “2x1” (se reducía un día por cada dos días de trabajo o estudio).

Administración: El Ministerio de Gobierno supervisa todas las cárceles en el país mediante la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). La ley que rige el sistema penitenciario no contempla promociones en base a méritos y no tiene un plan de desarrollo laboral ni una escala salarial. Durante el año el gobierno aumentó el salario a los custodios carcelarios de 500 balboas (\$500) a 690 balboas (\$690) por mes, pero a septiembre la Defensoría del Pueblo no podía confirmar si el aumento ya había entrado en vigor. En los primeros nueve meses del año la DGSP despidió a cinco custodios carcelarios por corrupción o errores administrativos y suspendió a dos custodios carcelarios por investigaciones pendientes. Una audiencia programada para octubre por el Segundo Tribunal Penal a 12 personas (nueve policías, dos custodios civiles y la directora del Centro

Juvenil) en juicio por un incendio en el centro de detención juvenil en el 2011 fue pospuesta en espera de un fallo de la Corte Suprema.

Una actualización de software para mantener los registros carcelarios estaba en funcionamiento en tres cárceles (La Chorrera, Llano Marin, La Joyita); el resto de las cárceles utilizaban una versión más vieja. Los jueces pueden ordenar libertad condicional como alternativa a la condena de menores infractores no violentos. Durante el año los jueces otorgaron libertad condicional a 551 menores infractores no violentos lo cual requirió de consejería psicológica, asistencia regular a la escuela y reuniones regulares con una trabajadora social. Hasta diciembre once menores infractores estaban bajo arresto domiciliario. El nuevo sistema de justicia acusatorio, en funcionamiento en cuatro provincias para fin de año, incluye disposiciones para reducción de condenas y de esta forma reduce el encarcelamiento de adultos infractores no violentos (ver sección 1.e.).

El programa piloto de 2011 relacionado al monitoreo electrónico de reclusos no violentos que no han ido a juicio fue suspendido durante el año. Los aparatos fueron puestos a servicio de la aplicación de la nueva ley de femicidio, la cual estipula que se requieren brazaletes para ejecutar las órdenes de restricción.

Los reclusos podían presentar quejas ante las autoridades judiciales sin censura y podían solicitar investigaciones sobre acusaciones creíbles en cuanto a condiciones inhumanas; sin embargo, las autoridades no documentaban los resultados de dichas investigaciones de forma accesible públicamente. La Defensoría del Pueblo negoció y realizó peticiones en nombre y representación de los reclusos y recibió quejas sobre condiciones carcelarias. La Defensoría del Pueblo también realizó visitas semanales a las cárceles, y el gobierno generalmente no monitoreaba sus reuniones con los reclusos. Hasta noviembre la Defensoría del Pueblo había recibido una queja por abuso físico cometido por un agente de la PNP.

Los reclusos en la mayoría de las instalaciones tenían acceso razonable a visitas y se les permitía observar sus creencias religiosas. La organización no gubernamental católica (ONG) Justicia y Paz realizó visitas regulares y reportó que no se le impidió el acceso a varios grupos de iglesias de diferentes denominaciones. Las autoridades limitaron el acceso a las cárceles para los grupos religiosos a un máximo de dos representantes religiosos por visita y les requirió que presentaran un plan de acción anual para justificar acceso a los reclusos.

Vigilancia Independiente: El gobierno permitió el monitoreo penitenciario por observadores independientes no gubernamentales, incluyendo a una delegación de

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la cual posteriormente emitió un informe exhaustivo en cuanto a la corrupción en el sistema penitenciario. En octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para abordar problemas con el hacinamiento, conductas ilegales y detenciones extensas en las cárceles del país.

Mejoras: El gobierno tomó varias medidas para mejorar las condiciones de las cárceles y los centros de detención. Para mejorar los registros, instaló software nuevo en tres cárceles el cual incluye información exhaustiva sobre cada recluso, incluyendo información sobre su condición legal, fechas de audiencias y de condena. El órgano judicial, sin embargo, no estaba conectado a la base de datos del sistema penitenciario, lo cual demoró la entrega de documentación necesaria para programar audiencias.

A septiembre, 260 custodios carcelarios y 63 por ciento del personal administrativo habían recibido capacitación en cuanto a ley penitenciaria, derechos humanos, temas de género, el nueva sistema acusatorio y las convenciones de Tokio, Bangkok y de Tortura en la Academia de Capacitación Penitenciaria, en colaboración con la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y los fiscales del Ministerio Público.

#### **d. Arresto o Detención Arbitraria**

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones.

#### **El Papel de la Policía y los Estamentos de Seguridad**

El país no tiene una fuerza militar regular. La PNP es responsable de la aplicación de la ley y del orden público a nivel interno. Las autoridades civiles en el Ministerio de Seguridad Pública mantuvieron control efectivo sobre todas las fuerzas policiales, investigativas, fronterizas, aéreas y marítimas en el país. El gobierno tiene mecanismos para investigar y castigar el abuso y la corrupción, pero hubo problemas de impunidad.

Varias leyes limitan el uso de la fuerza. Una requiere que la policía respete los derechos humanos y prohíbe la tortura, la crueldad u otro comportamiento inhumano o degradante. La Ley 74 de 2010 prohíbe la detención o cualquier acto de disciplina interna en contra de policías acusados de utilizar exceso de fuerza

antes de ser condenados. En 2012 un fallo unánime de la Corte Suprema, fallando en referencia a un caso específico, declaró que la aplicación de la ley anterior en un caso en particular era inválida; sin embargo, a finales de año la ley permanecía en vigor.

### **Procedimientos de Arresto y Trato de los Detenidos**

La Fiscalía emite las órdenes de arresto con base en la evidencia. La ley estipula que los sospechosos deben ser llevados ante un juez sin demora; sin embargo, la falta de una lectura de cargos inmediata seguía siendo un problema, salvo en los distritos que operan bajo el nuevo sistema de justicia acusatorio bajo el cual la falta de una lectura de cargos inmediata invalidaría la detención. La ley requiere que los oficiales de arresto informen a los detenidos inmediatamente de la razón del arresto o la detención y del derecho inmediato a un abogado. La ley estipula que existe la fianza y, si bien, existe un sistema de fianza funcional para una cantidad limitada de delitos, él mismo casi no se usaba en la mayoría de los casos procesados bajo el antiguo sistema penal inquisitivo, el cual estaba en efecto en la mitad de los distritos judiciales. Bajo el sistema inquisitivo, la mayoría de los procesos de fianza están a discreción de la Fiscalía y no pueden ser iniciados de forma independiente por los detenidos o sus abogados. A los detenidos se les permitía acceso sin demora a un abogado y a sus familiares, y el gobierno suministró a los acusados indigentes un abogado.

La ley prohíbe que la policía detenga a sospechosos por más de 48 horas sin autorización judicial, pero permite la detención de menores por 72 horas. Por ley bajo el sistema inquisitivo la fase de investigación preliminar de la detención puede durar de ocho días a dos meses, y la fase de investigación de seguimiento puede durar otros dos a cuatro meses, dependiendo del número de sospechosos.

Arrestos Arbitrarios: La policía generalmente arrestaba a las personas abiertamente y no practicaba arrestos ni detenciones arbitrarias ni secretas.

Detención Preventiva: El gobierno regularmente mantenía detenidos a los reclusos por más de un año antes de una audiencia preliminar ante un juez, y en algunos casos la detención preventiva excedía la condena mínima para el supuesto delito. Esto se debía en gran parte a la ineficiencia judicial y la utilización de un sistema inquisitivo por escrito. Hasta septiembre, de acuerdo a las estadísticas del gobierno, el 64 por ciento de los reclusos estaban en detención preventiva. Bajo el sistema inquisitivo los reclusos esperan aproximadamente un año en detención preventiva, aunque hubo casos de periodos de espera de dos años. Los tribunales

en las cuatro provincias que empezaron a utilizar el nuevo sistema acusatorio reflejaron una disminución en la mora judicial como resultado del nuevo sistema, disminuyendo el tiempo de proceso de los casos en 85 por ciento. La comunicación entre las autoridades mejoró durante el año y nuevos sistemas de procedimientos fueron implementados para mantener la programación de las audiencias.

En 2012 las autoridades cerraron la cárcel de La Palma en Darién y transfirieron a los reclusos a la cárcel La Joya en la Ciudad de Panamá pero durante el año la cárcel de La Palma mantuvo a reclusos provisionalmente cuando fueron inicialmente arrestados. El traspaso a La Joya o La Joyita fue lento. Hasta septiembre 28 personas fueron mantenidas en La Palma. La cárcel tenía dos celdas con poca ventilación. Conflictos previos a raíz de la jurisdicción legal de los casos que involucran a reclusos de Darién se resolvieron: los casos continuarían siendo escuchados en los tribunales de Darién y los reclusos serían transportados desde allí hasta la Ciudad de Panamá para sus audiencias.

En octubre el gobierno pasó la Ley 77 que requería que los individuos en detención preventiva fueran mantenidos en cárceles ubicadas dentro de la provincia o el distrito legal donde se cometió el supuesto delito. La ley no se aplicaba a individuos con cargos de blanqueo de capitales, trata de personas, delitos en contra de la seguridad nacional ni delitos en contra de la humanidad.

#### **e. Denegación de un Juicio Público Justo**

La ley estipula que el Órgano Judicial es independiente; sin embargo, el sistema judicial fue ineficiente y susceptible a corrupción e influencias externas y hubo acusaciones de manipulación por el Órgano Ejecutivo.

La Dirección de Investigación Judicial, bajo el control administrativo de la PNP, brinda servicios de investigación al sistema judicial. A nivel local, los alcaldes nombran a jueces administrativos (corregidores) que ejercen jurisdicción sobre casos civiles menores y el arresto y la imposición de multas o condenas carcelarias de hasta un año. Fuera de la Ciudad de Panamá este sistema tenía serios defectos. Estos jueces usualmente no tenían entrenamiento legal u otra experiencia pertinente. Los acusados no tenían garantías procesales adecuadas. El proceso de apelación generalmente no existía. Los acusados pudientes a menudo pagaban las multas mientras que los acusados menos pudientes eran encarcelados.

### **Procedimientos Judiciales**

La ley estipula que todos los ciudadanos acusados de un delito se presume son inocentes y tienen derecho a asesoría legal, derecho a no incriminarse a sí mismos o a familiares cercanos, y a ser enjuiciados solamente una vez por un delito dado. Si no está en detención preventiva, el acusado puede estar presente con su abogado durante la fase investigativa del proceso.

En 2012 el gobierno implementó un nuevo código de procedimiento penal (diseñado para realizar la transición nacional del sistema de justicia inquisitivo a un sistema acusatorio) en las provincias de Los Santos y Herrera. Este nuevo sistema fue implementado primero en las provincias de Veraguas y Coclé en 2011. El gobierno tenía un presupuesto de 38 millones de balboas (\$38 millones) para el proceso de implementación en cuatro fases, el cual estaba pendiente desde el 2009 y se esperaba que concluyera en el 2014. En febrero la Asamblea Nacional votó para retrasar la implementación de las dos fases restantes por dos años adicionales, hasta el 2015 y 2016 respectivamente, dejando el nuevo sistema acusatorio intacto en los distritos en los que ya se había implementado. El sistema, el cual busca hacer la justicia más expedita, incluye tres etapas: investigación fiscal supervisada por un juez de garantías cuya responsabilidad es garantizar el debido proceso, una solicitud para formulación de cargos por parte del fiscal, y juicios orales con tres jueces.

Conforme al sistema judicial inquisitivo, el cual estaba en efecto en todas, salvo cuatro provincias, los juicios son abiertos al público. La ley estipula que el juicio con un jurado se da en caso que lo solicite el acusado, pero sólo en casos en los cuales una de las acusaciones es homicidio. Los jueces pueden ordenar la presencia de personas en detención preventiva para dar declaraciones o ampliarlas o para realizar un careo con los testigos. Los juicios se realizan con base en la evidencia presentada por el fiscal. Los acusados tienen el derecho de estar presentes en el juicio y a consultar con un abogado de forma oportuna. Los acusados pueden carear o interrogar a los testigos en contra de ellos y presentar testigos y evidencia a su favor. Los acusados y sus abogados tienen acceso a evidencia relevante en posesión del gobierno. Los acusados tienen el derecho de apelar. La ley le extiende estos derechos a todos los ciudadanos, y el Órgano Judicial generalmente los aplicó.

La ley obliga al gobierno a suministrar defensores públicos para los indigentes. En muchos casos los defensores públicos recibieron el caso en etapas avanzadas de la investigación, cuando el fiscal ya había evaluado la mayoría de la evidencia y decidido recomendar el llamamiento a juicio. Bajo el sistema inquisitivo no había

procedimientos bien establecidos para que los acusados objetaran la admisibilidad de la evidencia.

Durante el año el programa de juzgados móviles se redujo ya que los jueces aceptaron celebrar más audiencias por video para ayudar a descongestionar el sistema. Se acondicionaron salones para audiencias por video en La Joya, La Joyita, La Chorrera y San Miguelito. El salón de audiencias por video de Colón no operó debido a la falta de personal técnico para manejar el equipo.

Adicionalmente tres salones de audiencias por video estaban en funcionamiento en el edificio principal de la corte en la Ciudad de Panamá para los reclusos detenidos en otras provincias. El traspaso de reclusos se daba sólo para acusaciones de homicidio o para audiencias en los tribunales de las provincias de Colón y Darién. El Órgano Judicial informó de aproximadamente 12 audiencias por mes en esas provincias.

De enero a septiembre 2,247 audiencias por video se programaron en la provincia de Panamá; 1,417 realmente sucedieron. Las otras 830 audiencias no sucedieron debido a la ausencia de los abogados de los acusados.

### **Prisioneros Políticos y Detenidos**

No hubo reportes de prisioneros o detenidos políticos.

### **Procedimientos y Recursos Civiles Judiciales**

La Constitución y el Código Judicial establecen un Órgano Judicial independiente para asuntos civiles. La presunta manipulación política del sistema judicial seguía siendo un problema, y las demoras burocráticas impedían el acceso a recursos judiciales y administrativos en algunos casos en los tribunales. Continuaron las dificultades para hacer cumplir las órdenes de los juzgados de familia.

#### **f. Interferencia Arbitraria en la Privacidad, la Familia, el Hogar o la Correspondencia**

La ley prohíbe dichas acciones y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones. El Ministerio Público mantuvo representantes en cada división de la PNP para aprobar los allanamientos y aprobaron numerosos allanamientos durante el año.

La ley también establece los requisitos para realizar vigilancia a través de intervenciones telefónicas. Niega a los fiscales la autoridad para ordenar intervenciones telefónicas bajo su propia autoridad, y requiere de autorización judicial para estas. Durante el año varios ciudadanos alegaron que fueron objeto de intervenciones telefónicas luego de dar declaraciones en contra del gobierno.

## **Sección 2 Respeto por las Libertades Civiles, Incluyendo:**

### **a. Libertad de Expresión y de Prensa**

La Constitución contempla la libertad de expresión y la de prensa, pero el gobierno hizo varios intentos para impedir la libertad de expresión de los medios y para acallar la crítica hacia sus funcionarios públicos.

Libertad de Expresión: Un informe de agosto del Sindicato de Periodistas de Panamá mencionó 43 casos relacionados a limitaciones o amenazas a la libertad de expresión durante los primeros ocho meses del año. De los 24 casos más recientes presentados, 20 involucraron amenazas realizadas por los poderes políticos o judiciales. Estas amenazas generalmente fueron insultos públicos y críticas fuertes a los medios o periodistas particulares por reportajes que no eran favorables al gobierno.

Violencia y Acoso: Se informó de varios incidentes menores que incluyeron la detención innecesariamente ruda y a veces arbitraria de miembros idóneos de la prensa por oficiales de seguridad. En junio dos periodistas de TVN Canal 2 fueron detenidos por filmar afuera de la sede del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), lo cual de acuerdo al CNS “ponía en riesgo la seguridad de la nación”. El secretario ejecutivo del Sindicato de Periodistas de Panamá fue informado y se presentó al lugar. Mientras filmaba con su teléfono móvil, adujo que fue atacado físicamente por el secretario del CNS y otros miembros. Dos periodistas informaron que fueron detenidos por la policía mientras trabajaban en reportajes en las afueras de la Ciudad de Panamá y en Colón.

En junio un tribunal declaró culpables a cinco acusados del homicidio de Darío Fernández Jaén y los condenó de 33 a 41 años de prisión. Fernández Jaén, propietario de la estación de radio regional Radio Mi Favorita y ex gobernador de la provincia de Coclé, fue asesinado a tiros en frente de su casa en 2011 por reportar sobre la corrupción en la venta de terrenos.

Censura o Restricción de Contenido: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación Interamericana de Prensa, la ONG Reporteros sin Fronteras, y otros grupos criticaron los esfuerzos gubernamentales de censurar a la prensa. El Foro de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Panamá adujeron que se redujo el acceso a información oficial, específicamente para periodistas que publicaron o reportaron artículos que criticaban al gobierno. Ejemplos de la reducción a acceso de la información incluyen la cancelación de entrevistas programadas, y el subsecuente rechazo de miembros del gabinete y del secretario de prensa del Estado de participar en programas noticiosos en TVN Canal 2 o el programa *Sin Rodeos* de Radio Panamá. Adicionalmente durante una entrevista televisiva el 10 de octubre en Telemetro, el Presidente Martinelli admitió haber ordenado a las personas dentro de su administración que no contestaran preguntas de los periodistas de *La Prensa*.

Leyes de Calumnia / Seguridad Nacional: En febrero la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los periodistas Sabrina Bacal y Justino González, declarándolos inocentes de los cargos de calumnia e injuria presentados el 2005. De acuerdo al magistrado de la Corte Suprema la información publicada por los periodistas Bacal y González era correcta y estaba basada en una investigación realizada por el CNS. Adicionalmente, el fallo del juez indicó que no había intención de malicia en dicha publicación.

### **Libertad de Uso de Internet**

No hubo restricciones por parte del gobierno para acceder al internet, pero hubo informes anecdóticos indicando que el gobierno monitoreaba correos electrónicos privados sin la autoridad legal apropiada. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2012 había 1.6 millones de usuarios de internet en el país, representando el 45 por ciento de la población total.

### **Libertad Académica y Eventos Culturales**

No hubo restricciones por parte del gobierno en cuanto a la libertad académica o eventos culturales.

#### **b. Libertad de Reunión y de Asociación Pacífica**

La ley contempla las libertades de reunión y de asociación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica. Sin embargo, la policía en ocasiones utilizó la fuerza para dispersar a los manifestantes, especialmente cuando

bloqueaban las autopistas o carreteras. La ley declara que cualquiera que, mediante el uso de la violencia, impida el tránsito de vehículos en la vía pública o que ocasione daños a la propiedad privada o pública puede ser condenado a prisión de seis a 24 meses.

**c. Libertad de Culto**

Por favor, vea el *Informe Internacional de Libertad de Culto* en [www.state.gov/j/drl/irf/rpt](http://www.state.gov/j/drl/irf/rpt).

**d. Libertad de Circulación, Personas Desplazadas Internamente, Protección de Refugiados y Apátridas**

La ley contempla la libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, migración y repatriación y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica, salvo en la provincia de Darién. El gobierno cooperó, en general, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias en la protección y asistencia a los refugiados, a las personas bajo protección temporal humanitaria (PTH), a los solicitantes de asilo, y a otras personas de interés. El ACNUR tenía una unidad dedicada a Panamá dentro de su oficina regional.

En 2012 el gobierno estableció un Grupo de Trabajo Nacional bajo el liderazgo de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) con la participación del ACNUR, el cual brinda apoyo técnico para manejar casos de solicitantes de asilo y refugiados. La sede de la ONPAR está en la capital. Adicionalmente, tres colaboradores de la ONPAR mantuvieron presencia en diferentes regiones de la provincia de Darién y uno en la frontera con Costa Rica.

Circulación dentro del País: El gobierno, por lo general, permitió la libertad de circulación para los refugiados y solicitantes de asilo documentados; pero restringió la libertad de circulación para los ciudadanos colombianos que viven en la región fronteriza con Colombia en Darién bajo el régimen de PTH. Estos individuos sólo podían salir de esas zonas con permisos especiales temporales expedidos por la ONPAR.

**Protección de Refugiados**

Acceso a Asilo: Las leyes del país incluyen la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para proteger a los refugiados.

Un grupo de PTH colombianos ha vivido en la región de Darién por más de 17 años. Una ley de 2011 (Ley 81) establece una ruta para que aquellos que se encuentran bajo PTH obtengan residencia legal permanente y requiere que el gobierno complete este proceso de regularización en dos años luego de haber aprobado la ley. La ONPAR coordinó este proceso con el ACNUR, el Registro Civil de Panamá, y la Embajada de Colombia. La Ley 81 expira en 2014. El último censo de la ONPAR contó a 411 personas designadas PTH.

De acuerdo a la ONPAR, hasta junio había 1,608 personas con condición de refugiado, de los cuales 901 eran colombianos. Había 712 solicitudes para condición de refugiado pendientes y 368 de estas eran de colombianos.

SENAFRONT, la fuerza nacional encargada de la protección de fronteras y costas, detectó a 1,808 migrantes cubanos que llegaron entre enero y octubre en comparación con 2,658 en 2012. La mayoría pasaron por Panamá camino hacia el norte. En septiembre el gobierno otorgó asilo a nueve migrantes cubanos quienes llegaron de Bahamas.

El gobierno informó sobre la continua migración de personas del sur de Asia y de África en ruta hacia América del Norte. Un total de 563 personas solicitaron asilo entre enero y junio. La mayoría de los solicitantes de asilo eran colombianos. Las autoridades típicamente mantenían a los migrantes extra continentales en detención mientras verificaban sus identidades y revisaban sus solicitudes de asilo. Hasta diciembre había 48 detenidos en la instalación de detención de migración para hombres (Curundú) y 28 en la instalación para mujeres (Avenida Cuba).

De acuerdo con el ACNUR y las ONG aliadas que implementan sus programas, cientos de personas que viven en el país pueden necesitar protección internacional. Esto incluye a personas a las que no se les concedió asilo, personas cuyas solicitudes fueron rechazadas y personas que no aplicaron para la condición de refugiado debido a ignorancia o temor de deportación. Algunos buscaron legalizar su condición de otras formas. En un evento realizado por 15 días entre septiembre y octubre, 11,091 inmigrantes de varios países, principalmente Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Perú, Ecuador, El Salvador y China, solicitaron regularizar su condición mediante el programa “Crisol de Razas”. Este programa permite a inmigrantes ilegales la oportunidad de legalizar su condición, siempre y cuando puedan probar que están empleados y que paguen aproximadamente 1,300-1,800 balboas (\$1,300-1,800) en honorarios.

Devolución: La ley incorpora protección en contra de la devolución y sanciones por ingreso ilegal o irregular. Por momentos, sin embargo, los oficiales fronterizos y las autoridades en los centros urbanos no tenían una comprensión clara de sus responsabilidades al tratar con personas buscando condición de asilo o de refugiados. Esta falta de comprensión resultó en detenciones arbitrarias y ponía a los solicitantes de asilo en mayor riesgo de ser retornados forzosamente a países donde sus vidas o su libertad podrían estar en peligro.

Representantes del ACNUR informan de dos casos confirmados de devolución durante el año. El ACNUR envió notas diplomáticas al gobierno en ambos casos insistiendo que se respetasen y se aplicasen las leyes internacionales, específicamente la Convención de Refugiados de 1951.

Aldier Nieto Ramírez ingresó al país el 5 de junio y solicitó condición de refugiado. Fue mantenido en el centro de detención de la Ciudad de Panamá bajo el control de las autoridades de migración, donde fue entrevistado por la ONPAR para iniciar el proceso de refugio. Debido a una falta de comunicación o falta de comprensión, los oficiales de migración devolvieron a Ramírez a Colombia dos días después.

El 6 de julio y el 3 de agosto, oficiales de SENAFRONT devolvieron a 13 miembros de la comunidad indígena Wounaan a Colombia a pesar de que habían solicitado condición de refugiados.

Abuso de Refugiados: Las mujeres refugiadas en las áreas fronterizas y ciertos vecindarios urbanos siguieron estando en riesgo de violencia de género. El gobierno no permitió que los que mantenían condición de PTH se desplazaran libremente dentro del país.

Empleo: Los refugiados reconocidos por las autoridades tienen el derecho de trabajar pero los refugiados reconocidos se quejaron de que se enfrentaban a prácticas de contratación discriminatorias.

Acceso a Servicios Básicos: A los refugiados a veces se les negaba el acceso a la educación, mientras que a otros no se les emitían diplomas si no podían presentar registros escolares de su país de origen.

Soluciones Duraderas: El 22 de octubre el gobierno publicó la Ley 74 que permite que las personas reconocidas legalmente como refugiados o con condición de

asilados soliciten la residencia permanente. La Ley 74 aplica para individuos que han estado en el país más de tres años.

Protección Temporal: A las únicas personas que se les brindó protección temporal fue a las personas reconocidas con condición de PTH, mayormente de ascendencia afro colombiana. Una ley de 2011 estableció procedimientos para que este grupo de refugiados se convirtiera en residentes permanentes y el ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel activo en la implementación de la ley. La ONPAR es responsable del proceso con el apoyo de la Oficina del Registro Civil.

### **Sección 3. Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos Cambiar de Gobierno**

La ley da a los ciudadanos el derecho a cambiar pacíficamente de gobierno, y los ciudadanos, en la práctica, ejercieron este derecho mediante elecciones periódicas, libres e imparciales basadas en el sufragio universal. Por ley debe haber elecciones populares directas cada cinco años para elegir presidente, vicepresidente, diputados y representantes locales. Los ciudadanos naturalizados no pueden aspirar a ocupar determinadas categorías de cargos por elección.

#### **Elecciones y Participación Política**

Elecciones Recientes: En 2009 los electores eligieron a Ricardo A. Martinelli Berrocal, el candidato de la opositora Alianza para el Cambio, como presidente en elecciones nacionales, las cuales los observadores independientes generalmente consideraron libres e imparciales. En preparación para las elecciones generales de 2014, los partidos políticos celebraron primarias internas para candidatos presidenciales y nacionales. El Tribunal Electoral supervisó las primarias, las cuales se consideraron claras y transparentes.

Partidos Políticos: La ley exige a los nuevos partidos políticos cumplir estándares rigurosos en cuanto a su membresía y organización a fin de obtener el reconocimiento oficial y poder participar en las campañas nacionales. En septiembre el Tribunal Electoral reconoció al Frente Amplio por la Democracia (FAD) como un partido político nuevo y registrado legalmente al cumplir con las leyes electorales. Este reconocimiento permite que FAD participe en las elecciones generales de 2014.

Participación de las Mujeres y Minorías: Las mujeres ocuparon seis escaños en la Asamblea de 71 miembros y tres puestos en el gabinete de 17 miembros. Cinco escaños en la Asamblea estaban designados para representar a las regiones indígenas reconocidas del país. En general los diputados en la Asamblea, los miembros del Gabinete, y miembros de la Corte Suprema no se identificaron como miembros de minorías étnicas o raciales.

#### **Sección 4 Corrupción Oficial y Transparencia del Gobierno**

La ley contempla penas criminales por corrupción oficial, pero el gobierno de forma general, no implementó estas leyes efectivamente. Se alegó que funcionarios del gobierno participaron con impunidad en prácticas corruptas. La corrupción siguió siendo un problema en los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial al igual que en los estamentos de seguridad.

Existieron mecanismos anticorrupción tales como embargo de activos, protección de informantes y testigos, acuerdos de reducción de sentencia, y reglas de conflicto de interés profesional. A pesar de que la ley estipula que los nombramientos judiciales son a través de un sistema de mérito, los grupos de la sociedad civil mantuvieron que la influencia política y la interferencia indebida por los jueces de alto nivel socavaron el sistema.

Corrupción: En abril el gobierno aprobó la Ley 33 para ascender el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción a Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAI). ANTAI lucha contra la corrupción e investiga la corrupción gubernamental y es encabezada por la zarina anticorrupción Abigail Benzadon. La ANTAI continuó recibiendo críticas de los grupos de la sociedad civil por no operar de forma efectiva e independiente. La ANTAI parecía tener suficientes recursos.

En septiembre el capítulo local de Transparencia Internacional informó que el gobierno había realizado poco progreso en su lucha en contra de la corrupción, específicamente en casos que involucraron potenciales conflictos de interés y acceso libre a la información pública. El informe enfatizó la falta de reglamentación de las prohibiciones y las incompatibilidades que deben ser aplicadas a todas las autoridades elegidas, la falta de normas para las penas debido a ausencias laborales no aprobadas por las autoridades elegidas y la falta de reglamentación sobre el uso de los recursos públicos.

La corrupción y la falta de rendición de cuentas entre los agentes policiales continuó siendo un problema.

En febrero el gobierno despidió a tres colaboradores de la Dirección General de Ingresos y presento cargos de extorsión en contra de ellos, incluyendo al Director Regional de Veraguas, Rolando Rosas. A los empleados se les atrapó en un operativo encubierto intentando extraer pagos de comerciantes asiáticos. Bajo el sistema penal acusatorio establecido en Veraguas, el juez de garantías impuso arresto domiciliario a los tres colaboradores. En marzo la Corte de Apelaciones sobreseyó la decisión del juez de garantía y les otorgó fianza. Los individuos deben presentarse ante la corte cada 15 días hasta que se establezca una fecha de juicio.

En mayo el Tribunal Penal 12 condenó al ex ministro de educación Belgis Castro a tres años de prisión por malversación de 153,000 balboas (\$153,000) en la Ciudad de Panamá. Los abogados de Castro apelaron. Castro continua enfrentándose a cargos de malversación en siete otros casos en varias provincias.

En agosto, luego de presión por la sociedad civil, la Asamblea Nacional despidió a la Defensora del Pueblo Patria Portugal a razón de cargos por el Ministerio Público de manejo indebido de fondos públicos. Portugal fue reemplazada en septiembre por la abogada Lilia Herrera Mow para terminar el periodo de Portugal.

Protección de Informantes: Un anteproyecto de ley fue presentado en julio para garantizar la protección a los informantes.

Declaración Patrimonial: La ley requiere que ciertos funcionarios del Órgano Ejecutivo y del Judicial presenten declaraciones patrimoniales a la Contraloría General. En la declaración los funcionarios informan sobre sus declaraciones de renta, cuentas de banco, deudas pendientes y membresía en organizaciones. La información no se hace pública. Las autoridades sólo levantan acusaciones en casos de ganancias ilícitas; sin embargo, a los funcionarios se les retiene el salario si no presentan la declaración.

Acceso Público a la Información: La ley contempla el acceso público a información sobre entidades públicas excepto a las actas de las reuniones de gabinete. El gobierno a menudo, pero no siempre, daba respuesta a las solicitudes de información. La mayoría de estas solicitudes provenían de abogados. Los solicitantes podían apelar las decisiones de acceso denegado ante la Corte Suprema y los periodistas generalmente utilizaban este recurso. La fecha tope es 30 días y

no se cobran honorarios procesales. Hay sanciones por no cumplir, principalmente multas. Había poca promoción pública y poca capacitación sobre las leyes de libertad de información y sus procedimientos.

El gobierno se comprometió a publicar información pública en las páginas de internet oficiales. Sin embargo, muchos ministerios y agencias del gobierno no actualizaban sus páginas, y las estadísticas y otra información a menudo eran de hace más de un año o no estaban disponibles.

### **Sección 5. Actitud del Gobierno frente a la Investigación Internacional y No Gubernamental de Supuestas Violaciones a los Derechos Humanos**

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos operaban generalmente sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus descubrimientos en casos de derechos humanos. Funcionarios gubernamentales generalmente cooperaron y se mostraron receptivos a sus puntos de vista.

Entidades Gubernamentales de Derechos Humanos: El defensor del pueblo, elegido por la Asamblea Nacional, tiene autoridad moral pero no legal, recibió la cooperación del gobierno y operó sin interferencia del gobierno ni de partidos. La Defensoría del Pueblo refirió casos a las autoridades investigativas adecuadas.

### **Sección 6. Discriminación, Abusos Sociales y Trata de Personas**

La ley prohíbe discriminación con base en raza, género, discapacidad, lenguaje, o condición social, pero el gobierno no siempre aplicó estas prohibiciones de manera efectiva.

#### **Mujeres**

Violación y Violencia Doméstica: La ley penaliza la violación carnal, incluyendo violación conyugal, con condenas de cinco a 10 años y ocho a 10 años bajo circunstancias agravadas (uso de un arma). La violación carnal constituyó la mayoría de los crímenes sexuales investigados por la PNP, y su Dirección de Investigación Judicial. Sin embargo, las ONG reportaron que muchas mujeres estuvieron reacias a informar sobre violaciones a las autoridades debido a temor de represalias, respuestas inadecuadas y estigmas sociales. El Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) dentro del Ministerio de Seguridad Pública informó de 946 casos de violación carnal hasta finales de julio.

La violencia doméstica continuó siendo un problema serio y que se reportaba muy poco. El 21 de octubre el Presidente Martinelli firmó una ley diseñada específicamente para confrontar el “femicidio” o casos que involucran violencia con base en género. La nueva ley estipula mayores penas por acoso y tanto por abuso emocional como físico, y establece encarcelamiento de hasta 30 años por homicidio. La ley penaliza el abuso doméstico y la violencia familiar con periodos de encarcelamiento de dos hasta cuatro años y hace de la violencia doméstica una circunstancia agravante en casos de homicidio. También hace obligatorias medidas de educación y de prevención de violencia al igual que una cantidad de servicios de apoyo para las víctimas. Las estadísticas del SIEC informaron de 1,283 casos de violencia doméstica entre enero y junio. Las estadísticas de enero hasta septiembre del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, manejado por la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, mostraron que de las 47 mujeres que murieron violentamente, 30 murieron como resultado de violencia doméstica. La mayoría de los homicidios por violencia doméstica ocurrieron en las noches de los fines de semana, y el 51 por ciento de las víctimas estaban entre los 11 y los 30 años de edad.

El gobierno, a través del Instituto Nacional de la Mujer, operó albergues en la Ciudad de Panamá, Chiriquí y Colón para víctimas de abuso doméstico y ofreció servicios sociales, psicológicos, médicos y legales a aproximadamente 45 mujeres hasta noviembre. En 2012 la Defensoría del Pueblo obtuvo instalaciones con siete apartamentos para un albergue para víctimas de violencia doméstica que sería operado por el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género; sin embargo la falta de fondos para pagar al personal administrativo que administraría el albergue previno que el gobierno emitiera el permiso legal para abrir el albergue. En septiembre el Observatorio y el Instituto Nacional de la Mujer firmaron un acuerdo para transferir las instalaciones a la administración del Instituto.

Acoso Sexual: La ley prohíbe el acoso sexual en casos de relaciones de empleador/empleado establecidas tanto en el sector privado como en el público, y en relaciones de maestro/estudiante; los infractores se enfrentan a condenas de hasta tres años de cárcel. El alcance del problema fue difícil de determinar dado que las condenas por acoso sexual fueron raras, y el acoso sexual previo a la relación laboral no se podía procesar. Las estadísticas del gobierno mostraron 110 casos de acoso sexual abiertos entre enero y julio.

Derechos Reproductivos: Las parejas y los individuos tienen el derecho a decidir la cantidad, distribución y programación de sus hijos, y tenían la información y los medios para hacerlo sin ninguna discriminación. Acceso a información sobre

anticonceptivos, y a asistencia entrenada durante el parto y postparto estaban ampliamente disponibles, salvo en las comarcas a nivel provincial, donde el acceso a esto era muy limitado según la Cruz Roja Americana. En marzo el gobierno aprobó una ley de esterilización, Ley 196, que permitía que las mujeres de 23 años o más que ya tuvieran dos hijos decidieran si preferían someterse a esterilización voluntaria.

Discriminación: La ley prohíbe la discriminación en base a género, y las mujeres disfrutaban de los mismos derechos que los hombres en cuanto a familia, propiedad, y ley penal. La ley reconoce la propiedad conjunta y común en los matrimonios. Por mandato legal, la remuneración debe ser igual para hombres y mujeres en trabajos equivalentes. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Nacional de la Mujer promovieron la igualdad de las mujeres en el entorno laboral, e igual remuneración por igual trabajo, intentaron reducir el acoso sexual, y abogaron a favor de reformas legales.

## **Menores**

Registro de Nacimiento: A pesar de que la ley contempla ciudadanía para todas las personas nacidas en el país, los menores en áreas remotas algunas veces tenían dificultad en obtener certificados de nacimiento.

Abuso Infantil: El MIDES mantuvo una línea caliente gratis para que los menores y los adultos reportaran abusos infantiles, la cual fue ampliamente publicitada. Desde enero hasta septiembre, la línea caliente recibió 8,680 llamadas. El ministerio suministró fondos a albergues para menores, operados por las ONG en siete provincias, y continuó con un programa que utilizaba panfletos en las escuelas para concienciar a los maestros, estudiantes y padres de familia sobre el maltrato y abuso sexual de menores.

Matrimonio Forzado y Anticipado: La edad mínima legal para el matrimonio es 18, sin embargo las mujeres pueden casarse a los 14 y los varones a los 16 con consentimiento de los padres.

Explotación Sexual de Menores: El abuso sexual de menores fue reportado en áreas urbanas y rurales, al igual que dentro de las comunidades indígenas. Hasta junio las estadísticas del gobierno mostraron 14 casos nuevos de pornografía infantil y 34 casos nuevos de abuso sexual de menores.

La ley prohíbe el sexo consensual entre adultos y menores entre 14 a 18 años, salvo menores que están casados con consentimiento de sus padres, y estipula una condena de hasta tres años de cárcel por este delito. Si el niño o la niña es menor a 14 años, el delito tiene una pena de cuatro a 10 años de cárcel. La ley estipula un periodo de encarcelación de tres a cinco años para cualquiera que practique, facilite, o promueva la corrupción de un menor y también penaliza la pornografía infantil con la misma condena. El Código Penal también penaliza a los individuos por vender o negociar la compra de actos sexuales con prostitutas con condenas de hasta 10 años de prisión cuando la víctima es menor de 18. El turismo sexual que involucre a menores también es penalizado.

**Sustracción Internacional de Menores:** El país es parte de la Convención de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para mayor información ver el informe anual del Departamento de Estado sobre el cumplimiento en

[http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport\\_4308.html](http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html), al igual que información específica del país en [http://travel.state.gov/abduction/country/country\\_5880.html](http://travel.state.gov/abduction/country/country_5880.html).

### **Anti-semitismo**

Había una población judía de aproximadamente 12,000 personas. En junio, en su programa radial personal, la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, públicamente llamó a la periodista de *La Prensa*, Flor Mizrachi “judiita de la Gestapo”. Los grupos judíos locales y el Centro Simon Wiesenthal de Argentina condenaron los comentarios de la gobernadora. La Gobernadora Correa estuvo en desacuerdo con un artículo de Mizrachi que criticaba al Presidente Martinelli.

### **Trata de Personas**

Por favor, vea el *Informe de Trata de Personas* del Departamento de Estado en [www.state.gov/j/tip](http://www.state.gov/j/tip).

### **Personas con Discapacidad**

La ley prohíbe la discriminación basada en discapacidad física, sensorial, intelectual o mental; sin embargo, la constitución permite la negación del proceso de naturalización a personas con discapacidades mentales o físicas. Por ley es obligatorio el acceso a edificios públicos nuevos o remodelados para personas con discapacidad y la misma requiere que las escuelas integren a niños con

discapacidades. Las personas con discapacidad experimentaron discriminación significativa en cuanto a acceso a transporte, empleo, educación, acceso a salud, y el suministro de otros servicios estatales. La nueva flota de buses de la Ciudad de Panamá fue accesible a sillas de ruedas al momento de su introducción en 2011, pero la posterior instalación de tornos de seguridad hizo que el acceso fuera difícil para pasajeros en sillas de ruedas. La mayoría de los comercios tenían rampas para sillas de ruedas y estacionamientos accesibles tal como lo requiere la ley, pero en muchos casos no estaban de acorde con las especificaciones gubernamentales en cuanto al tamaño. Algunas escuelas públicas admitían a niños con discapacidades mentales y físicas pero la mayoría no tenían instalaciones adecuadas para otros niños con discapacidades. El gobierno instaló rampas en algunas escuelas e integró a algunos niños con discapacidad. Pocas escuelas privadas admitían niños con discapacidades.

En 2012 el Presidente Martinelli firmó una ley estableciendo el programa Ángel Guardián, el cual brinda un subsidio de 80 balboas (\$80.00) por mes para niños con discapacidades físicas severas. Para calificar, los padres o tutores de un niño deben estar viviendo en condiciones de pobreza y deben presentar un certificado médico relacionado a la severidad de la discapacidad y la dependencia del niño o la niña en otra persona. El gobierno realizó el primer desembolso de fondos de este programa en agosto. Un total de 1,657 personas con discapacidad recibieron un cheque por 160 balboas (\$160).

Durante el año la Oficina de la Primera Dama continuó promoviendo la conciencia sobre el autismo. En adición a participar en varias conferencias, la Oficina de la Primera Dama patrocinó el primer censo para personas con autismo el cual censó a 686 individuos.

Hasta octubre no había ningún fallo de la Corte Suprema en relación a la objeción en contra de la Ley 35 con base en la discriminación y la protección de información privada. La ley de 2010 requiere que el Tribunal Electoral incluya las discapacidades de la persona, al igual que el tipo de sangre y las alergias en la cédula de identificación nacional para casos de emergencia. La ley también requiere que la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre incluya la misma información en las licencias de conducir emitidas por el estado. Ni el Tribunal Electoral ni la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre aplicaban esta ley.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) es la agencia del gobierno responsable de proteger los derechos de las personas con discapacidad. El

Ministerio de Educación y el MIDES comparten la responsabilidad de educar y entrenar a menores con discapacidad.

En julio SENADIS declaró públicamente que no podría realizar el proceso de “certificación” nacional para personas con discapacidad debido a falta de recursos y de personal capacitado, impidiendo que el país cumpla con la Evaluación de Discapacidad requerida por la Organización Mundial de la Salud.

La ley estipula una cuota de 2 por ciento para personas con discapacidad dentro de la fuerza laboral. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) es el responsable de referir a trabajadores con discapacidad a empleadores para trabajos adecuados; sin embargo, en la práctica la contratación exitosa por empleadores en el sector privado siguió siendo pobre. En agosto SENADIS y MITRADEL patrocinaron una feria de trabajo con 50 compañías locales para ofrecer trabajo a personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo recibió quejas de violaciones por parte del gobierno que involucraban los derechos laborales de personas con discapacidad.

SENADIS continuó operando el proyecto Famiempresas, el cual ayudó a familias de bajos ingresos con miembros con discapacidad a abrir microempresas. El gobierno desembolsó 50 balboas (\$50) mensualmente y donó equipo de rehabilitación a personas de bajos ingresos con discapacidad. SENADIS junto con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y el INADEH organizaron cursos de capacitación de una semana en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro para personas con discapacidad interesadas en abrir un pequeño negocio.

SENADIS entrenó al personal del Tribunal Electoral a nivel nacional sobre como asistir a las personas con discapacidad a prepararse para las elecciones de 2014. La capacitación creó conciencia para que los centros de votación y los salones de votación fueran los más accesibles posible. El Tribunal Electoral lanzó una campaña en los medios alentando a las personas con discapacidad a llamar a una línea caliente de forma que sus nombres fueran colocados en salones de votación accesibles.

En octubre la Defensoría del Pueblo capacitó a 20 empleados en lenguaje de señas para que pudieran asistir a los ciudadanos sordos con quejas potenciales.

### **Minorías Nacionales/Raciales/Étnicas**

Los grupos minoritarios han sido, en general, integrados a la sociedad. Sin embargo, hubo prejuicios hacia inmigrantes recientes. Diferencias culturales y de lenguaje y la condición migratoria impedían la integración de inmigrantes e individuos de primera generación de China, India y el Medio Oriente a la sociedad. Adicionalmente, algunos miembros de estas comunidades estaban, ellos mismos, renuentes a integrarse a la sociedad. Miembros de estos grupos frecuentemente eran dueños de grandes negocios o trabajaban en la venta al por menor. Una disposición constitucional que reserva el comercio al por menor para ciudadanos del país generalmente no se aplicaba.

La comunidad afro-panameña seguía estando representada en baja proporción en las posiciones de poder político y económico. Las áreas donde habitaban carecían notablemente de servicios gubernamentales y de inversión en el sector social. El prejuicio en contra de los negros era generalmente sutil, utilizando políticas no oficiales de “derecho de admisión” en restaurantes y establecimientos comerciales que discriminaban en contra de individuos de piel más oscura o aquellos de una condición social más baja.

La ley prohíbe la discriminación para ingresar a establecimientos públicos tales como restaurantes, tiendas, y otros comercios de propiedad privada. Los casos de discriminación en establecimientos públicos generalmente no eran denunciados.

Hubo reportes de discriminación racial en contra de varios grupos étnicos en el entorno laboral. En general las personas de piel más clara estaban representadas de forma desproporcionada en los puestos gerenciales y en trabajos que requerían atención al público, tales como cajeros bancarios y recepcionistas. Algunos negocios discriminaban en contra de ciudadanos de piel oscura mediante prácticas preferenciales de contratación.

### **Indígenas**

La ley brinda a los indígenas los mismos derechos políticos y legales que tienen los demás ciudadanos, protege su identidad étnica y sus lenguas nativas, y requiere que el gobierno cree programas de alfabetismo bilingüe en las comunidades indígenas. Los indígenas tienen el derecho legal a participar en las decisiones que afectan sus tierras, su cultura, sus tradiciones y la asignación y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, en la práctica su participación en la sociedad continuó siendo marginal. Había comarcas legalmente designadas, gobernadas por líderes comunitarios tradicionales para cinco de los siete grupos indígenas del país,

incluyendo las comunidades Embera-Wounaan, Ngabe-Bugle, y Guna. El gobierno no reconoció comarcas para las comunidades más pequeñas de Bri-Bri y Naso. En junio la Autoridad Nacional de Tierras entregó dos títulos nuevos que cubren 3,310 acres de tierras colectivas a los Embera-Wounaan. Seis reclamos por tierras colectivas estaban pendientes a finales de año. No se habían entregado nuevos títulos de tierra sobre tierras colectivas en la Comarca Embera-Wounaan.

El Ministerio de Gobierno incluye una Dirección de Política Indigenista y el 20 de septiembre aprobó una ley que crea un Vice Ministerio para Asuntos Indígenas. Hasta noviembre no se había nombrado a un vice ministro. El papel de esta nueva oficina es desarrollar políticas que aborden las necesidades sociales, económicas y culturales de todos los grupos indígenas. El Ministerio de Gobierno también redactó, en coordinación con todos los líderes indígenas, un exhaustivo Plan de Desarrollo para los Grupos Indígenas que estaba siendo revisado por los Congresos Generales y demás autoridades indígenas. A pesar de que la ley del país es la última autoridad en las comarcas indígenas, los grupos indígenas mantuvieron considerable autonomía. A pesar de esto, muchos indígenas no entendieron sus derechos y no utilizaron los canales legales al sentirse amenazados por no tener un conocimiento adecuado del idioma español.

Durante el año hubo múltiples conflictos entre el gobierno y los grupos indígenas sobre decisiones que afectan las tierras indígenas. Los Ngabe Bugle y los Nasos continuaron chocando con el gobierno en el tema de las hidroeléctricas en tierras territoriales, y el gobierno en varias ocasiones desplegó a los antimotines para liberar las carreteras y lugares de trabajo que habían sido bloqueados por los indígenas. SENAFRONT tuvo conflictos con las autoridades de la Comarca Guna sobre el alcance de la autonomía mientras estaban en patrullajes fronterizos en territorio Guna. Los Guna plantean que no se pueden llevar a cabo operaciones en sus territorios sin notificar al Congreso General; sin embargo, SENAFRONT mantiene que tiene autoridad para realizar operaciones dentro de la comarca.

Las comunidades indígenas continuaron luchando en contra de colonos ilegales en su territorio. No se reportaron conflictos violentos pero hubo cierre de carreteras y protestas tanto por indígenas como por colonos en relación a territorios en las comarcas y en las tierras colectivas. A fin de año la Corte Suprema no había emitido fallos sobre casos relacionados a problemas territoriales en la Comarca Embera-Wounaan. En febrero la CIDH envió un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionado a los Guna de Mandungandi y los Embera de Bayano en contra del gobierno por no proteger adecuadamente y de forma efectiva los territorios ancestrales y los recursos de estos grupos

La discriminación social y laboral en contra de personas indígenas era común. Los empleadores frecuentemente no ofrecían a los trabajadores indígenas los derechos básicos establecidos por ley, tales como salario mínimo, beneficios de seguro social, liquidación, y estabilidad laboral. Los trabajadores en las plantaciones de azúcar, café y bananos del país (la mayoría de los cuales eran indígenas) continuaban trabajando en condiciones de hacinamiento y sin condiciones sanitarias. Era menos probable que los empleadores brindaran viviendas o alimentos adecuados a trabajadores migrantes indígenas, y era más probable que los niños indígenas trabajaran largas horas en trabajo agrícola que los niños no indígenas (ver sección 7.d.). MITRADEL ejercía una supervisión limitada en cuanto a las condiciones laborales en áreas remotas debido a limitaciones de personal.

La educación continuó siendo deficiente en las comarcas indígenas, especialmente más allá de la escuela primaria. No había suficientes maestros debido a lo remoto y lo inaccesible de las áreas. Muchas escuelas eran multigrado, no tenían agua potable y la construcción era muy pobre. El acceso a la atención de salud continuó siendo un problema significativo en las comarcas indígenas y se reflejó en las altas tasas de mortalidad infantil y desnutrición. Para abordar estos problemas el Ministerio de Salud creó la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas.

### **Abusos Sociales, Discriminación y Actos de Violencia Provocados por la Orientación Sexual y la Identidad de Género**

La ley no prohíbe la discriminación con base en la orientación sexual, y hubo discriminación social con base en la orientación sexual y la identidad de género, lo cual a menudo llevó a que se negaran las oportunidades de empleo. Los reglamentos de la PNP describen la conducta homosexual como una “falta grave”. El acoso a personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, y transgénero (LGBT por sus siglas en inglés) por los estamentos de seguridad fue una de las principales quejas de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), la principal organización LGBT en el país, pero las quejas formales eran raras debido a la percepción de que las denuncias no se tomaban en serio o que las denuncias podían ser utilizadas en contra de los querellantes en vista de que no existían leyes no discriminatorias. El 29 de junio los promotores de los derechos para homosexuales encabezaron el desfile anual de orgullo gay.

La Asociación Panameña de Personas Transgénero reportó incidentes regulares en los cuales los estamentos de seguridad se rehusaron a aceptar denuncias de acoso hacia individuos transgénero.

### **Otro Tipo de Violencia Social o Discriminación**

La ley prohíbe la discriminación en contra de personas con VIH/SIDA en lo laboral y lo educativo, pero la discriminación continuaba siendo común debido a la ignorancia de la ley y la falta de mecanismos para garantizar el cumplimiento.

## **Sección 7. Derechos de los Trabajadores**

### **a. Libertad de Asociación y el Derecho a la Negociación Colectiva**

La ley reconoce el derecho de los trabajadores del sector privado de formar y unirse a los sindicatos de su elección, sujeto a que el sindicato esté registrado ante el gobierno. Los servidores públicos no pueden formar sindicatos pero sí pueden formar asociaciones que pueden negociar colectivamente en nombre y representación de los miembros.

La ley establece que los trabajadores del sector privado tienen el derecho a huelga y la Ley de Carrera Administrativa otorga a los servidores públicos los mismos derechos (cuando se considera legal y cuando están cubiertas las posiciones esenciales por el porcentaje mínimo de trabajadores que estipula la ley). El derecho a huelga no aplica en aquellas áreas que se consideran vitales para el bienestar público y la seguridad, incluyendo policías y trabajadores de salud. La ley establece que todos los trabajadores del sector privado y del sector público tienen el derecho a negociar colectivamente, prohíbe la discriminación en contra de los sindicatos por parte de los empleadores, y protege de perder sus trabajos o de traslados discriminatorios a trabajadores que participen en actividades del sindicato.

La ley impone varias restricciones a estos derechos, incluyendo el requerir la ciudadanía para estar en la junta directiva de un sindicato, el requerir un mínimo de 40 personas para formar un sindicato del sector privado (ya sea por compañía sin consideración de oficio o por oficio sin considerar la compañía), y permite sólo un sindicato por establecimiento comercial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) continuó criticando el mínimo de 40 personas declarando que era muy alto para los trabajadores interesados en formar un sindicato dentro de una

compañía. El gobierno, el sector privado, y los sindicatos reiteraron su apoyo a mantener la cifra en 40 individuos.

De forma similar, se requieren 50 servidores públicos para formar una asociación de trabajadores. Asociaciones de miembros representan a los servidores públicos, tales como doctores, enfermeras, bomberos, y personal administrativo en ministerios del gobierno. La ley estipula que no puede haber más de una asociación en una institución del sector público y no permite más de un capítulo por provincia.

La ley estipula que si el gobierno no responde a una solicitud de registro en 15 días, el sindicato automáticamente obtiene reconocimiento legal.

Las huelgas deben ser apoyadas por la mayoría de los empleados y relacionadas a la mejoría de las condiciones de trabajo, una convención colectiva o en apoyo de otra huelga de trabajadores en el mismo proyecto (huelga solidaria). En caso de una huelga de personal administrativo, por lo menos el 25 por ciento de la fuerza laboral debe continuar brindando servicios mínimos; y 50 por ciento de los trabajadores que brindan “servicios públicos esenciales” según los defina la ley, tales como transporte, bomberos, correos, hospitales y telecomunicaciones, deben continuar brindando esos servicios.

Las huelgas en los servicios de transporte esenciales se limitan a aquellas que involucran servicios públicos de pasajeros. La ley prohíbe el derecho a huelga a los empleados de la Autoridad del Canal de Panamá pero permite que se organicen sindicatos y que se negocie colectivamente en cuanto a temas como horarios y seguridad. También estipula que las disputas se resuelven mediante arbitraje. Por ley la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), una federación paraguas con 21 asociaciones de trabajadores del sector público, no tiene la facultad de decretar una huelga ni de negociar convenciones colectivas. No obstante, las organizaciones individuales bajo la FENASEP pueden negociar en representación de sus miembros.

Decisiones de la Corte Suprema reconocen que las convenciones colectivas negociadas entre los empleadores y los trabajadores no organizados tienen condición legal equivalente a las convenciones colectivas negociadas por un sindicato. Decretos ejecutivos estipulan que un empleador no puede celebrar convenciones colectivas con trabajadores que no pertenecen a sindicatos cuando existe un sindicato y que un acuerdo preexistente con trabajadores que no pertenecen a un sindicato no puede ser utilizado para rehusarse a negociar con

trabajadores miembros de un sindicato. El *Manual de Derechos y Obligaciones Laborales* de MITRADEL estipula que los trabajadores no organizados pueden hacer peticiones al ministerio en relación a violaciones a derechos laborales y pueden ejercer el derecho a huelga.

Un decreto ejecutivo protege a los trabajadores de interferencia del empleador en los derechos laborales, incluye específicamente a “los sindicatos dirigidos por empleadores,” y hace obligatorio que los sindicatos sean escogidos libremente por los trabajadores sin sanciones.

El gobierno carecía de suficientes mecanismos para asegurar que las leyes que prohíben la interferencia por parte de los empleadores en los sindicatos y que protegen a los trabajadores de represalias por los empleadores se cumplieran a cabalidad. Multas de 100 a 2,000 balboas (\$100 a \$2,000) pueden ser impuestas a los empleadores que se encuentre están interfiriendo con los sindicatos, doblándose las multas cada vez que se encuentre que un empleador repite el acto de interferencia. MITRADEL reportó que la insuficiencia de personal, la mora en casos, e información incompleta o incorrecta en las solicitudes atrasaron el proceso de registros de nuevos sindicatos dentro del periodo de tiempo requerido. MITRADEL informó de 16 registros nuevos entre enero y octubre. MITRADEL hizo la observación de que el gobierno notificaría a los empleadores y podría darle seguimiento a los casos en los tribunales, sin embargo no había información disponible sobre estos esfuerzos a finales de año. Durante el año MITRADEL también se volvió a unir a la Fundación del Trabajo, una organización tripartita que agrupa a los trabajadores organizados, a los empleadores y al gobierno.

En adición al sistema judicial, la Junta de Conciliación de MITRADEL tiene la autoridad para resolver algunas disputas laborales, tales como disputas sindicales internas, obligar al cumplimiento del salario mínimo, y algunos temas relacionados a despidos. La ley permite arbitraje por consentimiento mutuo, por solicitud del trabajador, o a solicitud de MITRADEL en caso de una disputa colectiva en una empresa de servicios públicos y permite a cualquiera de las dos partes apelar si se ordena un arbitraje durante una disputa colectiva en una compañía de servicios públicos. La Junta de Conciliación Tripartita, la cual está separada, tiene competencia única para disputas relacionadas a los empleados domésticos, algunos temas de despidos y reclamos de menos de 1.500 balboas (\$1,500). Para los trabajadores del sector público, la Junta de Apelaciones y Conciliaciones en el Ministerio de la Presidencia escucha y resuelve los reclamos. Si no son resueltos por la junta, los reclamos se refieren a un tribunal de arbitraje, el cual consiste de

representantes del empleador, la asociación de empleados, y un tercer miembro escogido por los dos primeros. Las decisiones del tribunal son finales.

A pesar de que los sindicatos en el sector privado ejercían ampliamente su derecho a organizarse y de negociar colectivamente, la discriminación en contra de los sindicatos, la pérdida de trabajos y los traslados discriminatorios ocurrían en la práctica. Líderes sindicales continuaron expresando su preocupación por acciones gubernamentales, tales como auditorías a los presupuestos de los sindicatos, lo cual caracterizaron como interferencia e intimidación. También declararon que en la práctica el registro automático de sindicatos no existía y que en algunos casos el gobierno incorrectamente se negó a reconocer a sindicatos. Los líderes sindicales informaron que los sindicatos fueron acosados por el gobierno, incluso mediante falsas acusaciones de corrupción en contra de líderes sindicales, poniendo obstáculos para la organización de los trabajadores, y criminalizando las protestas sociales. Por ejemplo, los representantes de la Confederación Panameña de Trabajadores alegaron que MITRADEL incorrectamente se rehusó a registrar un sindicato industrial de los trabajadores de Metrobus a finales del 2012 y que muchos trabajadores fueron incorrectamente despedidos luego de ser acusados falsamente de vandalizar los buses durante una huelga salvaje.

Los empleadores en la industria al por menor frecuentemente contrataban trabajadores temporales con el fin de eludir los requisitos legales para los trabajadores permanentes. En los empleos de servicio que no requieren habilidades especializadas, los empleadores a menudo contrataban a los trabajadores bajo contratos de tres meses por varios años, a veces enviando a dichos trabajadores a casa por un mes para luego volverlos a contratar. Los empleadores también eludían la ley que requiere dos semanas de preaviso para despido al despedir a los trabajadores una semana antes de un día feriado. Debido a leyes que dificultan el despido de empleados que han trabajado dos años, los empleadores frecuentemente contrataban a los empleados por un año y once meses para luego despedirlos.

Mientras que los líderes sindicales en general aprobaban la Junta de Conciliación, algunos grupos de abogados la criticaban como una ruta para eludir al sistema judicial, dejando la interpretación de leyes laborales en mano de personas que podrían no tener pericia, y por abrir el sistema de resolución de disputas laborales a la presión política.

#### **b. Prohibición de Trabajo Forzado u Obligatorio**

La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzado de adultos o niños. La ley estipula condenas de 15 a 20 años de cárcel por trabajo forzado que involucre traslado (ya sea a través de fronteras o dentro de un país), y de seis a 10 años de cárcel por trabajo forzado que no involucre traslado.

Durante el año el gobierno no abrió investigaciones nuevas ni juicios por trabajo forzado.

Continuó habiendo informes de que ocurrieron algunos casos de trabajo forzado de adultos. Hubo informes anecdóticos de que ciudadanos chinos eran forzados a trabajar en tiendas de víveres y lavanderías en situaciones de trabajo por deuda, al igual que informes de que mujeres colombianas y nicaragüenses eran sujetas a situaciones de servidumbre doméstica.

También ver el *Informe de Trata de Personas* del Departamento de Estado en [www.state.gov/j/tip](http://www.state.gov/j/tip).

### **c. Prohibición de Trabajo de Menores y Edad Mínima para el Empleo**

La ley prohíbe que niños menores a 14 sean empleados, aunque los niños que no han completado la escuela primaria no pueden empezar a trabajar hasta los 15 años. Se pueden hacer excepciones para niños de 12 años o más para que realicen trabajo agrícola ligero, siempre y cuando no interfiera con sus horas de escuela. La ley no limita la cantidad total de horas que los menores pueden trabajar en la agricultura ni define qué tipo de trabajo ligero pueden realizar los menores. La Ley prohíbe a niños de 14 a 18 años a participar en trabajo potencialmente peligroso e identifica dicho trabajo peligroso como labores que incluyen energía eléctrica, explosivos, o sustancias inflamables, tóxicas o radioactivas; trabajar bajo tierra y en ferrocarriles, aviones y barcos; y trabajo en clubes nocturnos, bares y casinos.

Los jóvenes menores a 16 años no podrán trabajar más de seis horas al día o 36 horas a la semana, mientras que los que tengan 16 y 17 no podrán trabajar más de siete horas por día o 42 horas a la semana. Los niños de menos de 18 no podrán trabajar entre 6:00 p.m. y 8:00 a.m.

MITRADEL generalmente aplicó la ley efectivamente en el sector formal haciendo cumplir las disposiciones de trabajo infantil en respuesta a quejas y dando la orden de terminar una relación laboral no autorizada, mas no en la economía informal. Durante el año MITRADEL identificó a 1,546 niños, niñas y adolescentes participando en trabajo infantil. Por ley los infractores pueden ser multados hasta 700 balboas (\$700) por una primera infracción. Para fines de año MITRADEL había recibido 42 informes formales sobre violaciones a las leyes de trabajo infantil, que dieron como resultado 22 sanciones en contra de los infractores. Los empleadores que pongan en peligro la salud física o mental de un niño o niña se enfrentan a encarcelamiento de dos a seis años. La ley incluye un castigo de hasta 12 años de cárcel para cualquiera que reclute a niños y niñas menores de 18 o los utilice para participar activamente en hostilidades armadas.

Como parte del programa de MITRADEL para la prevención y la erradicación del trabajo infantil, el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección a la Persona Adolescente Trabajadora (CETIPPAT) continuó con la promoción comunitaria y otorgando becas a menores trabajadores en todo el país para garantizar su acceso a la educación a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), habiendo otorgado 1,443 becas durante el año. MIDES, CETIPPAT, y la ONG Casa Esperanza continuaron un programa en la Comarca Ngabe Bugle y en las ciudades de Santiago de Veraguas y La Chorrera que ofrecía becas para niños trabajadores de forma que pudieran iniciar o retomar la escuela primaria. El programa también brindó entrenamiento vocacional y programas de alfabetización para sus padres.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia implementó programas para identificar a menores participando en las peores formas de trabajo infantil con el fin de removerlos de las situaciones de explotación y brindarles servicios. MITRADEL ofreció capacitación sobre el tema de trabajo infantil y lecciones aprendidas a varias partes interesadas.

De acuerdo a la encuesta de trabajo infantil de 2012 realizada por el gobierno, aproximadamente 50,400 niños y adolescentes (5.6 por ciento de la población total en el rango de cinco a 17 años) se encontraban trabajando. Sesenta y un por ciento de los niños trabajadores también asistían a la escuela. Cuarenta por ciento de los niños y adolescentes trabajadores dijeron que trabajaban menos de 15 horas a la semana, 35.5 por ciento trabajaban entre 15 y 34 horas y 24.6 por ciento trabajaban 35 horas o más.

Las violaciones en cuanto a trabajo infantil ocurrían mayormente en las áreas rurales en la agricultura y la pesca, especialmente durante la cosecha de melones, tomates, cebollas, café y en menor grado caña de azúcar. Los niños generalmente trabajaban de cinco a ocho horas por día en estas actividades. Los dueños de las fincas a menudo pagaban de acuerdo a la cantidad cosechada, lo que hacía que muchos trabajadores trajeran a sus pequeños niños a los campos para ayudar. El problema de trabajo infantil en las áreas agrícolas recaía más fuertemente sobre las familias indígenas que a menudo migraban de sus comunidades aisladas buscando trabajo remunerado y cuyas frecuentes migraciones interrumpían la escolarización. El trabajo infantil también ocurrió en el trabajo doméstico, y otras áreas del sector informal, incluso la venta de mercancía, limpiabotas, lava autos, y asistentes en los buses.

De acuerdo a Casa Esperanza, el trabajo infantil continuó en las áreas agrícolas en las provincias centrales y fue identificado en nuevos sectores de la Ciudad de Panamá, Colón, y David. En Colón los menores buscaban en el océano metal y otros enseres de los barcos para vender. En David se encontró a niños vendiendo flores y CD/DVD en la calle.

Ver también el Informe sobre la *Peores Formas de Trabajo Infantil* del Departamento de Trabajo en <http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda>.

#### **d. Condiciones Aceptables de Trabajo**

A final de año el salario mínimo iba de 1.22 a 2.36 balboas (\$1.22 a \$2.36) por hora, dependiendo de la región y el sector. Al trabajar una semana de 40 horas, 50 semanas al año, y ganando el salario mínimo promedio, un trabajador ganaría aproximadamente de 432 a 490 balboas (\$432-\$490) por mes. La línea de pobreza era de 98 balboas (\$98) en áreas rurales, mientras que en las áreas urbanas era de 131 balboas (\$131). Los alimentos y el uso de las instalaciones de vivienda se consideraban parte del salario para algunos trabajadores, tales como trabajadores domésticos y agrícolas. Los salarios para los empleados domésticos iban de 175 balboas a 200 balboas (\$175 a \$200) por mes. Los sectores agrícolas y de la construcción recibieron el salario mínimo más bajo y más alto respectivamente.

La ley establece una semana estándar de 48 horas, brinda por lo menos un periodo de descanso semanal de 24 horas, limita el número de horas que se trabaja por semana, brinda una prima salarial por sobretiempo, y prohíbe sobretiempo obligatorio. No hay límite anual sobre la cantidad total de horas de sobretiempo

permitidas. Si los trabajadores trabajan más de tres horas de sobretiempo en un día o más de nueve horas de sobretiempo en una semana, las horas excedentes de sobretiempo deben ser pagadas con una prima de 75 por ciento por encima del salario normal. Los trabajadores tienen el derecho a 30 días de vacaciones remuneradas por cada 11 meses de trabajo continuo, incluyendo aquellos que no trabajan tiempo completo. MITRADEL es responsable de establecer los estándares de salud y seguridad. Los estándares establecidos estaban, en general, actualizados y eran apropiados para las industrias principales en el país. El Código de Trabajo requiere que los empleadores provean un entorno laboral seguro, incluso el suministrar ropa protectora y equipo para los trabajadores.

MITRADEL generalmente aplicó estos estándares en el sector formal. La oficina de inspección estaba dividida en dos grupos: el grupo de la sede radicado en la Ciudad de Panamá y el grupo regional. Dentro de la sede había 41 inspectores laborales, incluyendo 11 inspectores de trabajo general, siete inspectores de trabajo infantil y 16 inspectores de seguridad (también denominados oficiales de seguridad) en la industria de la construcción. Los salarios de los inspectores de la industria de la construcción fueron pagados por la industria de la construcción, aun cuando los inspectores eran empleados de MITRADEL. En todo el país MITRADEL realizó 32,644 inspecciones laborales de todo tipo en el año. Las multas permitidas a razón de infracciones fueron bajas. Durante el año, sin embargo, el gobierno aplicó multas de acuerdo al número de trabajadores afectados lo cual produjo multas más altas en total. Durante el año MITRADEL había emitido 1,831 multas.

Los inspectores de MITRADEL y la sección de salud ocupacional de la Caja de Seguro Social informaron que realizaron inspecciones periódicas a sitios de trabajo peligrosos. La ley requiere que el ingeniero residente y un inspector de la industria de la construcción de MITRADEL (también conocido como oficial de seguridad) permanezcan en las construcciones, establece multas por el no cumplimiento, e identifica a un grupo tripartita compuesto por la Cámara de Construcción, el sindicato de la construcción SUNTRACS (el sindicato más grande de trabajadores de la construcción en el país) y MITRADEL, para regular la adherencia a estas normas.

La mayoría de los trabajadores empleados formalmente en las áreas urbanas ganaban el salario mínimo o más. Aproximadamente 40 por ciento de la población que labora trabajaba en el gran sector informal y ganaba bastante menos que el salario mínimo, particularmente en la mayoría de las áreas rurales, donde los trabajadores no calificados, incluyendo a vendedores ambulantes y aquellos

involucrados en la silvicultura, la pesca y la producción de artesanías, ganaban de tres a seis balboas (\$3.00 a \$6.00) por día sin beneficios. Era menos probable que MITRADEL aplicara las leyes laborales en la mayoría de las áreas rurales (ver sección 6, Indígenas).

Algunos trabajadores de la construcción murieron debido a accidentes sufridos en el trabajo. Algunos trabajadores de la construcción y sus empleadores ocasionalmente eran laxos en la aplicación de las medidas básicas de seguridad, frecuentemente porque percibían que reducían la productividad. El equipo a menudo estaba viejo, roto o le faltaban dispositivos de seguridad, en gran parte debido a temor de que el costo de reemplazo fuera prohibitivo.